



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-023-2019-00812-02 (O2-23-179)
Demandante: RUBÉN DARÍO AMARILES ARIAS
Demandadas: COLPENSIONES E.I.C.E. y PROTECCIÓN S.A.
Procedencia: JUZGADO VEINTITRÉS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por RUBÉN DARÍO AMARILES ARIAS en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-023-2019-00812-02 (O2-23-179), a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por la parte actora, en contra de la decisión adoptada el 13 de febrero de 2023, y mediante la cual el juzgador de instancia aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

1. ANTECEDENTES

El señor RUBÉN DARÍO AMARILES ARIAS, actuando por intermedio de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., a fin de que se declare la nulidad y/o ineficacia de su traslado al RAIS y que COLPENSIONES es la entidad que debe reconocerle la pensión de vejez, así como la consiguiente reactivación de su afiliación al RPMPD a través de COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la devolución de todos y cada uno de los aportes, incluidos sus rendimientos y sin ningún descuento por cuotas de

administración, y el reconocimiento y pago de las costas procesales; controversia que se dirimió en primera instancia por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, el 29 de septiembre de 2022 (doc.32, carp.01), el que declaró la ineficacia de la afiliación del actor al RAIS, ordenando, entre otras, a PROTECCIÓN a trasladar a COLPENSIONES E.I.C.E. dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor de la cuenta de ahorro individual del demandante con sus respectivos rendimientos, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, a la vez de gravar en costas a PROTECCIÓN S.A. en la suma de uno (1) SMLMV, a favor del demandante; sentencia que fue confirmada por esta Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 12 de diciembre de 2022 (doc.07, carp.02), sin lugar a condena en costas en esta instancia.

1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, en fecha 13 de febrero de 2023 (doc.39, carp.01) emitió el auto de cúmplase lo dispuesto por el superior funcional, y dispuso que por la secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las cuales se liquidaron por valor de uno (01) SMLMV para el año 2022, vale decir, la suma de \$1.000.000, por concepto de agencias en derecho, a cargo de la AFP PROTECCIÓN y a favor del señor RUBÉN DARÍO AMARILES ARIAS; liquidación sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha.

1.2. Recurso de Apelación

Inconforme de la decisión antes descrita, la apoderada judicial de la parte demandante (doc.16, carp.01), interpuso los recursos de reposición, y en subsidio apelación, solicitando se modifique a tres (03) SMLMV el valor de la costas tasadas en primera instancia, como quiera que a su juicio *“...en el proceso que nos convoca no se encuentra detallada de manera expresa el valor de una pretensión económica, sino que las pretensiones de la demanda son de índole declarativo y de obligación de hacer en contra de las entidades demandada, las cuales, siendo las pretensiones principales de la demanda salieron exitosas”*; agregando que asistió a todas las audiencias programadas por el a quo y realizó todas las actuaciones necesarias y requeridas.

1.3. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido por ésta corporación el 04 de agosto hogaño (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; oportunidad en la cual la poderhabiente judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. solicitó se confirmara la decisión opugnada, por cuanto la liquidación de costas se encuentra conforme a derecho, pues *“...el artículo 145 CPL faculta al juez para condenar en costas a la parte vencida teniendo en consideración LA CONDUCTA ASUMIDA por ésta, que es una norma de carácter procesal de vigencia inmediata de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 de 1887...”* (doc.03, carp.02).

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El punto neural de debate en la presente Litis se contrae a determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite de la primera instancia del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por RUBÉN DARÍO AMARILES ARIAS en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., se ajusta a la normativa que regula la materia.

2.2. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primer grado, con el argumento central de que la tasación de las agencias en derecho, se ajusta a los parámetros fijados por el Consejo Superior de la Judicatura, y el monto es equitativo, razonable, prudente y proporcional, respecto de la naturaleza, calidad y la duración de la gestión desplegada.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia nacional esta Corporación relleva que las costas, esto es, la erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, está conformada por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, descritos genéricamente en el numeral 3° del artículo 366 CGP como todos los demás gastos hechos por la parte beneficiada con la condena. Por otra parte, las agencias en derecho tienen por finalidad la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aunque pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho (CC sentencia C-089 de 2002).

De conformidad con lo indicado en el artículo 365 del CGP, las costas procesales, comprensiva de las expensas y las agencias en derecho, se imponen a cargo de la parte vencida, a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, y a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza.

Las costas son objeto de liquidación por el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, aplicando las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura para la fijación de las agencias en derecho y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión profesional desplegada, así como la cuantía de las condenas, sin exceder el tope máximo de dichas tarifas, como se previno en el artículo 366 CGP.

Para los anteriores efectos el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la emisión del **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016**, aplicable al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

“ARTICULO 5°. TARIFAS. Las tarifas de agencias en derecho son:

- | | |
|-----------------------------|---|
| <i>En única instancia</i> | <i>a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.</i> |
| | <i>b. En aquellos autos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 smlmv.</i> |
| <i>En primera instancia</i> | <i>a. Por cuantía: Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario</i>

<i>(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido</i>
<i>(ii) De mayor cuantía; entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.</i> |

b. Por la naturaleza del asunto: En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 smlmv.

En segunda instancia Entre 1 y 6 smlmv”.

Adicionalmente, conviene resaltar que de conformidad con lo indicado en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, la condena en costas no procede por un obrar temerario, de mala fe, o doloso de la parte condenada, sino que es el resultado de ser vencida en el proceso, es decir, su imposición se hace de forma objetiva atendiendo la prosperidad de las pretensiones y/o las excepciones; en tanto que su liquidación, por el contrario, corresponde a criterios ponderativos relacionados con la naturaleza, calidad, duración de la gestión ejecutada por el mandatario judicial, la cuantía de las pretensiones, y demás circunstancias relevantes, dentro de un concepto claro de razonabilidad y proporcionalidad.

Es meritorio entonces apuntar que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los límites máximo y mínimo fijados por la ley, pero sin que ello signifique que el fallador esté impelido a fijar como agencias el máximo referenciado.

Revisado el expediente, la Sala advierte que la demanda se radicó el 30 de julio de 2019 (doc.01, carp.01); se admitió el día 05 de agosto de la misma anualidad (doc.04, carp.01), se notificó a COLPENSIONES E.I.C.E. y a la codemandada AFP PROTECCIÓN S.A. el 12 de agosto de 2019 y el 11 de octubre de 2019 (docs.05 y 16, carp.01); se dirimió en primera instancia el 29 de septiembre de 2022 (doc.32, carp.01); que la actuación desplegada por la apoderada judicial de la parte actora, consistió en la presentación de la demanda (doc.02, carp.01), la gestión para notificar a la sociedad PROTECCIÓN S.A. y la comparecencia a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación el litigio, decreto de pruebas, trámite y juzgamiento (doc.32, carp.01).

Adicionalmente, se encuentra acreditado que el proceso de la referencia es de naturaleza ordinaria, y de complejidad baja, por razón de los reiterados pronunciamientos emitidos

por la jurisprudencia laboral del máximo órgano jurisdiccional, frente a la procedencia de las pretensiones incoadas; así mismo, obra constancia de que a pesar que la primera instancia se surtió en 3 años, 1 mes y 29 días, lo cierto es que, la dilación en su trámite obedeció a la suspensión de términos por motivo de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), situación ajena al juzgador de primer grado y a la conducta procesal asumida por las partes.

Así las cosas, la Sala considera que el monto fijado para la primera instancia, esto es, la suma de \$1.000.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A., corresponde a un ejercicio ponderativo equitativo, razonable, prudente y proporcional, a juzgar por la naturaleza, calidad y la duración útil de la gestión desplegada, a sabiendas de que los límites mínimo y máximo autorizados, ondean entre 1 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues el proceso fue de baja complejidad, y su duración útil no fue prolija, por lo que abundan las razones para impartir confirmación al proveído confutado.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 365 del CGP**, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,

4. RESUELVE


PRIMERO: CONFIRMAR la liquidación de costas aprobada el 13 de febrero de 2023 por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por RUBÉN DARÍO AMARILES ARIAS en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., según y conforme la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.


Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS No. 151**, fijados en la secretaría del Tribunal, hoy **31 de agosto de 2023** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en ["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario